

# Observaciones sobre el Estado y la Revolución en Cuba. 1920-1940

Robert Whitney

Profesor. Universidad de New Brunswick, Saint John, Canadá.

Entre el decenio de los años 20 y principios de los 40, las presiones combinadas de la movilización de masas, la revolución, la crisis económica y la amenaza de intervención de los Estados Unidos obligaron a los políticos cubanos, de todo el espectro ideológico, a aceptar a las clases populares como un factor en la política nacional e internacional.<sup>1</sup> En 1920, una pequeña y poderosa oligarquía tenía una gran ascendencia sobre la política nacional, y la idea de que el Estado pudiera ser «popular» constituía una maldición para los grupos hegemónicos. Sin embargo, a principios del decenio de los 30, la protesta social de las clases populares se hizo tan general que los mecanismos de control político y social establecidos dejaron de funcionar. En aquel momento, la forma de incorporar a «las masas» al proceso político, en modo alguno resultaba evidente. Una cosa era que las élites políticas reconocieran que los sectores populares constituían una fuerza que era menester tomar en cuenta, y otra muy distinta crear instituciones políticas y discursos nuevos capaces de utilizar esa energía. En el verano de 1933, antes de que fuera posible acostumbrarse a la idea de «las

masas» como agentes políticos, en Cuba estalló una revolución social.

Durante los ocho años que precedieron a 1933, Cuba había estado gobernada por Gerardo Machado y Morales. Entre 1925 y 1930, el gobierno de Machado no enfrentó una oposición seria. Hacia 1929, sin embargo, la crisis económica provocada por la depresión mundial lanzó al caos el orden económico y político establecido. Todas las facciones de la élite cubana se veían, cada vez más, sitiadas por fuerzas sociales que se encontraban fuera de los círculos políticos tradicionales. Antes de 1933, la policía o la guardia rural apenas prestaban atención a un ocasional desfile estudiantil o una huelga obrera. Desde fines del decenio de los 90, en el siglo XIX, hasta el de los 20, la población cubana estaba demasiado fragmentada —social y económicamente— como para significar una amenaza sostenida a la élite gobernante. A principios de 1933, la intensidad de la protesta popular había alcanzado niveles sin precedentes. Machado estaba cada vez más aislado de los demás sectores de la élite política, y la crisis económica y la inquietud laboral desafiaban el orden político y social.

Con la revolución de 1933, las movilizaciones obreras y campesinas llevaron a los jóvenes y relativamente inexpertos revolucionarios al poder estatal. Entre septiembre de 1933 y enero de 1934, una coalición poco delimitada de activistas radicales, estudiantes, intelectuales de clase media y militares de baja graduación descontentos, formó un Gobierno Revolucionario Provisional. Esta coalición estaba dirigida por un popular profesor universitario, el doctor Ramón Grau San Martín. El gobierno de Grau prometió una «Cuba nueva» con justicia social para todas las clases y la abrogación de la Enmienda Platt.<sup>2</sup> Aunque los dirigentes revolucionarios deseaban el reconocimiento diplomático de Washington, consideraban que su legitimidad se basaba en la rebelión popular que los había llevado al poder y no dependía de la aprobación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A ese fin, durante el otoño de 1933 el gobierno decretó una serie de reformas drásticas. La Enmienda Platt se abrogó unilateralmente y todos los partidos políticos del machadato se disolvieron. El Gobierno Provisional concedió autonomía a la Universidad, las mujeres obtuvieron el derecho al voto, se decretó la jornada de ocho horas, se estableció salario mínimo para los cortadores de caña y se promovió el arbitraje obligatorio. El gobierno creó el Ministerio del Trabajo y se promulgó una ley que establecía que el 50% de los trabajadores de la agricultura, el comercio y la industria debían ser ciudadanos cubanos. El régimen de Grau fijó como prioridad la reforma agraria, y prometió a los campesinos el título legal de sus tierras. Por primera vez en la historia de Cuba, el país era gobernado por personas que no negociaban las condiciones del poder político con España (antes de 1898) o con los Estados Unidos (después).

El Gobierno Provisional sobrevivió hasta enero de 1934, cuando fue derrocado por otra coalición opositora, igualmente poco delimitada, de civiles derechistas y elementos militares. El movimiento, dirigido por un joven sargento, Fulgencio Batista y Zaldívar, tuvo el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Muchos cubanos de la época pensaron que el país volvería a los métodos tradicionales de dominio estatal. Antes —siempre que la lucha por el poder se les iba de las manos—, los diplomáticos estadounidenses gestionaban una solución de avenencia entre las facciones en conflicto. No había indicios de que esta vez las cosas fueran diferentes.

Sin embargo, después de 1933, Cuba fue un país muy distinto de lo que había sido unos pocos años antes. Las experiencias de la lucha revolucionaria y las movilizaciones de masas habían pasado a ser parte del paisaje político cubano. La revolución de 1933 politizó a la sociedad cubana en formas fundamentalmente

nuevas. Entre 1934 y 1940, surgió un nuevo consenso político y económico basado en principios autoritarios y reformistas. Después de la revolución de 1933, la mayoría de los grupos políticos de Cuba —de la extrema derecha a los comunistas— llegó a la conclusión de que un Estado nuevo y moderno debía intervenir en la sociedad a fin de modernizar las estructuras políticas y económicas del país. Este impulso reformista culminó en 1940, cuando una nueva Constitución proclamó la democracia política, los derechos de los trabajadores urbanos y rurales, la limitación de la superficie de las plantaciones azucareras y la necesidad de la intervención estatal sistemática en la economía, al tiempo que preservaba el papel supremo de la propiedad privada.<sup>3</sup> Irónicamente, muchas de las demandas de 1933 se convirtieron en edictos constitucionales en 1940. La Constitución de 1940 significó un reconocimiento colectivo de la élite económica y política, las clases populares, el ejército dirigido por Batista y los Estados Unidos, de que deseaban vivir juntos, por mucho que les desagradara. Aunque Cuba tuvo varios presidentes civiles entre 1935 y 1940, era evidente que «el hombre fuerte [Batista] gobernaba a Cuba mientras las sombras revoloteaban a su alrededor, en el escenario político».<sup>4</sup> Luego de controlar la política cubana, entre bambalinas, durante siete años, Batista pasó a presidente de Cuba en 1940. El joven comandante en jefe fue explícito acerca de su papel en el proceso político cubano después de 1933:

Muchos quieren olvidar que soy el jefe de una revolución social constructiva, y me ven como un mero guardián del orden público. Mi idea del orden es la de un arquitecto, en lugar de un policía. El verdadero orden es como un edificio simétrico —no requiere apuntalamiento para mantenerlo en su posición.<sup>5</sup>

El tema no era tanto si podía implementar políticas corporativas, sino cómo y cuándo podría poner en práctica sus ideas. Batista supervisó la transición del país de su dictadura militar en 1934, a la democracia constitucional nominal, en 1940.

## Movilización de masas y cambio político

La revolución de 1933 socavó las instituciones y estructuras coercitivas del Estado oligárquico. Sigo a Lawrence Whitehead en su definición de «Estado oligárquico» como aquel «en que la autoridad pública existente está en general al servicio de un sector limitado de la población que deriva su coherencia de diversas fuentes no estatales de poder social, como la propiedad de la tierra, la estirpe familiar o una posición ventajosa en el comercio y las finanzas internacionales».<sup>6</sup> Para los fines del presente estudio, dentro del contexto cubano,

la «oligarquía» sería la élite política y azucarera cubana y no los capitalistas extranjeros residentes en la Isla. El término oligarquía pudiera dar la impresión de que este grupo era homogéneo desde el punto de vista social y que estaba claramente separado de los sectores «no oligárquicos». En modo alguno esto era así, y debemos ver con precaución a las oligarquías como clase social o como categoría histórica abstracta. Los plantadores azucareros, los capitalistas urbanos en gran escala, los comerciantes importadores y exportadores, los banqueros, los políticos profesionales, los que detentaban regional o localmente el poder, y los oficiales de alta graduación en el ejército, tenían intereses precisos y cada uno de ellos solía promover políticas que no concordaban con los intereses de los demás miembros de la clase dominante; ni siquiera con los Estados Unidos. En gran parte de los estudios que tratan sobre las élites políticas latinoamericanas, existe la tendencia a juntar todos estos grupos, como si fuesen miembros de una clase social con intereses comunes.

A pesar de estas diferencias internas, existentes dentro de las clases altas de Cuba, utilizaré el término «oligarquía» y «poder oligárquico» como conceptos ampliamente descriptivos que contrastan con la política del Estado moderno. El poder oligárquico en Cuba no tenía base nacional. Lo que hacía oligárquico al Estado era que los grupos dominantes recurrían a líneas de sangre y lazos de familia —reales o ficticios— como fuente de su condición y autoridad. Por lo tanto, el poder político no se centraba en ningún grupo o institución particular; más bien se repartía en una compleja jerarquía de redes nacionales, regionales y locales, de caciques y caudillos. El poder de estos dependía de su capacidad de brindar a sus seguidores acceso a los ingresos estatales y de distribuir recursos locales, tanto humanos como materiales. En otras palabras, el poder oligárquico era, a un tiempo, «económico» y «extraeconómico». Económico, en el sentido de que los caudillos y caciques poseían tierra y capital y solían ser muy empresariales. Su poder era también extraeconómico porque su capacidad de distribuir riqueza, empleos, tierra, acceso al mercado y cargos políticos, se derivaba de un cuidadoso cultivo de la autoridad personal, la reputación y la lealtad. En Cuba, eso significaba que los dirigentes políticos necesitaban mantener una relación estrecha con las empresas azucareras —casi todas bajo control extranjero—, porque la economía azucarera generaba la mayoría de los ingresos estatales y no estatales. Aunque si bien después de 1898 a la élite política y económica cubana se le negaba el control directo de la mayor parte de la producción de la riqueza nacional, también los caciques y caudillos que se encontraban en las diversas capas de la sociedad política demostraron ser muy

Observaciones sobre el Estado y la Revolución en Cuba. 1920-1940.

eficaces en la redistribución de la riqueza para obtener ganancias económicas e influencia política. En contraste con la naturaleza difusa del poder oligárquico, la idea del «Estado moderno» descansaba en el principio de que los dirigentes estatales debían movilizar a toda la población para la causa nacional. Mientras el poder oligárquico era arbitrario, el Estado moderno existía para aplicar y legitimar los principios de la democracia y la independencia. El estatus privilegiado de nación se fusionó —y se hizo idéntico— con la idea del Estado. Este se convirtió en patrimonio colectivo de la sociedad. Estos eran los principales sentimientos en que se basaba el consenso constitucional de 1940.

El argumento principal del presente estudio es que la transición del gobierno oligárquico al Estado moderno se produjo principalmente por la movilización de las clases populares contra el capitalismo oligárquico. Sin dudas, el Estado moderno en Cuba, como en muchos otros países coloniales, nunca tuvo bases fuertes. Aunque es cierto que el consenso constitucional de 1940 reflejó un cambio importante en la cultura política cubana, seguía siendo resultado de un conjunto singular de sucesos nacionales e internacionales. Los factores combinados de la depresión económica mundial del decenio de los 30, la inminente guerra en Europa, el alza del frente popular antifascista, el crecimiento de movimientos populistas y corporatistas de izquierda y derecha en el mundo, y la propia revolución cubana de 1933, fijaron los términos de la formación del Estado en Cuba entre 1930 y 1940. Después de 1940, sin embargo, el auge económico de guerra y posguerra, la derrota del fascismo y el surgimiento de la geopolítica de Guerra fría, redefinieron el carácter del discurso y la práctica políticos en Cuba y en el resto de América Latina. En las décadas de los 40 y los 50, el populismo de tendencia izquierdista de los 30 cedió su lugar a un conservadurismo anticomunista. Pronto el gangsterismo, la violencia y la corrupción fueron instrumentos políticos mucho más eficaces que los idealistas estatutos de la Constitución. A pesar de este desalentador resultado, hubo un amplio consenso popular en el sentido de que era necesario establecer un «Estado moderno» en Cuba. Entre los decenios de los 20 y los 40, los políticos y activistas estaban implacablemente divididos en torno a lo que significaba un poder estatal «popular» y uno «moderno». La participación de las masas y la democracia significaban cosas distintas para las diferentes personas. Pero ningún político —no importa su ubicación en el espectro nacional—, podía pasar por alto la poderosa idea de que un Estado moderno debía producir una Cuba nueva y democrática. El caudillismo y el caciquismo continuaban infestando la política cubana, pero ya no

eran los únicos mecanismos a disposición de los cubanos. La política partidista, las concentraciones de masas, las campañas electorales y la legitimidad constitucional también eran de importancia.

En el sentido más amplio, pues, lo que cambió entre 1920 y 1940 fue la cultura política cubana. Asumo el término «cultura política» en sentido antropológico y no en la forma en que lo utilizaron los teóricos de la modernización. Para la escuela de la modernización —y cabría añadir para los neoliberales de hoy—, la cultura política tiene que ver con valores, creencias y tradiciones más bien abstractos, que influyen negativa o positivamente en la capacidad de las personas para alcanzar «valores cívicos» democráticos liberales (modernos), o una «sociedad civil» de igual tipo. De lo que se infiere, implícita o explícitamente, que algunas sociedades «poseen» una cultura política superior a otras y que los puntos de referencia para ser «moderno», «democrático» y «políticamente culto» son los valores políticos capitalistas occidentales. En cambio, considero que la cultura política tiene que ver con la capacidad y el poder de conferir significados a las cosas, personas, relaciones sociales de producción e ideas, dentro de contextos históricos y luchas sociales concretas. En otras palabras, la cultura política no se define, de modo exclusivo, por su relación con el Estado moderno, ni —como suele darse a entender—, constituye una categoría políticamente neutra o inherentemente positiva. Tiene que ver con los recuerdos, luchas y valores colectivos vivientes, de los grupos sociales que crean sus propias identidades y significados políticos no solo para oponerse a los discursos y prácticas dominantes, sino para crear otras formas de vida. Usar el Estado moderno como norma a través de la cual medir la cultura política, pasa por alto la realidad de que existe una completa gama de prácticas y discursos humanos que la realidad material del poder estatal no abarca. Siguiendo a E. P. Thompson, veo las luchas sociales y culturales como elementos que definen el proceso de formación de clase y Estado; la cultura política tiene que ver con la forma en que las personas comprenden el sentido de estas luchas.<sup>7</sup> La importancia del consenso constitucional de 1940 consistió en que representó un intento de comprender el sentido del equilibrio del poder en Cuba, luego de 1933.

La agitación de fines del decenio de los 20 y principios de los 30 alcanzó un punto culminante con la revolución de 1933. Los historiadores casi siempre ven esos sucesos como parte de la «larga revolución» de Cuba por la independencia y la justicia social.<sup>8</sup> Esta larga revolución «comenzó» en 1868-1878 y 1895-1898 con las guerras contra España por la independencia; continuó con la revolución «frustrada» de 1933, y «culminó» con la revolución de 1959. Los

estudiosos sustentan diversas opiniones en lo tocante a cómo la revolución de 1933 se adecua a este proceso histórico más amplio, pero existe un consenso general de que fue importante por haber puesto en marcha un proceso político que, en última instancia —¿tal vez inevitablemente?—, conduciría a la victoria de Fidel Castro.

Un grupo de historiadores ve a 1933 como una revolución democrática-liberal frustrada, que, de haber alcanzado resultados positivos, habría evitado la revolución socialista, más radical, de 1959. Grau no era un político radical. Por el contrario, la prensa cubana solía llamarlo «el Roosevelt de Cuba» porque deseaba una «Cuba nueva», controlada por cubanos y no por capitalistas foráneos. Aunque eran profundamente nacionalistas, Grau y sus seguidores distaban mucho de oponerse a los Estados Unidos. Sin embargo, eran anti-intervencionistas. Desde la perspectiva de muchos nacionalistas cubanos, podía establecerse una distinción clara entre los avariciosos «consorcios» capitalistas de Wall Street y el liberalismo «imparcial» del New Deal del presidente Franklin Delano Roosevelt. Desde que se produjo la intervención estadounidense en Cuba, en 1898, los «consorcios» de las grandes empresas azucareras, bancos, empresas terratenientes y otros intereses privados hicieron en la Isla, más o menos, lo que desearon. A principios de 1933, sin embargo, el recién electo presidente de los Estados Unidos prometió que su país sería un «buen vecino» y respetaría la soberanía de los países latinoamericanos. Este cambio de dirección de los que, en los Estados Unidos, conducían la política pareció un buen augurio para el futuro de Cuba. Grau y quienes lo apoyaban admiraban muchas cosas en las políticas sociales de patrocinio estatal del gobierno del New Deal, y no vieron razón para que los Estados Unidos negaran su reconocimiento al nuevo gobierno del país. De modo que cuando el gobierno norteamericano no reconoció a Grau, y el representante especial, Sumner Wells, apoyó el golpe de Batista, pareció como si los «consorcios» determinaran una vez más la política estadounidense hacia Cuba. El optimismo reformista quedó aplastado. Otra de las causas que condujeron al desplome del régimen revolucionario fue que carecía de un partido político capaz de canalizar el apoyo popular en forma eficaz. La lucha entre facciones, y la indecisión, socavaban la capacidad del gobierno. Al propio tiempo, el Partido Comunista y sus cuadros sindicales se le oponían de modo vehemente. Mientras tanto, Batista reorganizaba el ejército, sin estar sometido al control del gabinete. El gobierno era un castillo de naipes a punto de desplomarse.

La perspectiva explícita o implícita de estos historiadores es que la derrota de 1933 «frustró» los

**La tendencia de los historiadores de ver a Batista exclusivamente como contrarrevolucionario [...] ha oscurecido las bases en que se sustentó su fase populista de 1937 a 1940 y, diría yo, el porqué Cuba se convirtió en una democracia oficial en 1940.**

sentimientos nacionalistas cubanos y que, en la década de los 50, Fidel Castro explotó este sentimiento de frustración. Por ejemplo, en el capítulo final de su libro sobre la revolución de 1933, Luis Aguilar considera «evidente» el vínculo entre 1933 y 1959. Después de la frustración que produjeron los corruptos y violentos decenios de los 40 y los 50, Fidel Castro «habló del modo que la gente deseaba oír»; a principios de los 60, sin embargo, cambió el rumbo y llevó a Cuba en una dirección «inesperada» y «trágica». Ramón Bonachea y Marta San Martín inician su libro sobre la insurrección cubana de 1952 a 1959 diciendo que la generación de los años 50 tenía, en esencia, la misma ideología que la frustrada generación del 30, pero que esta vez Fidel Castro y sus seguidores eran más decididos y estaban mejor guiados. Del mismo modo, Andrés Suárez afirma que el éxito alcanzado por Fidel Castro puede explicarse por la forma en que manipuló la «atmósfera de frustración trágica» que databa desde la derrota de 1934. El éxito rebelde no sería, por tanto, obra propia, sino resultado de la incapacidad de los cubanos de mentalidad reformista para alcanzar la victoria, en 1933 y después.<sup>9</sup>

Una posición bastante cercana, en lo tocante a los sucesos de 1933, hace mayor hincapié en la incapacidad o resistencia de los Estados Unidos para comprender sus implicaciones. De haber apoyado al gobierno moderado de Grau, la historia posterior de Cuba pudo haber tomado un giro bien distinto. La política estadounidense, sin embargo, estaba encerrada en la visión miope de mantener a toda costa la estabilidad en Cuba. Aun cuando Grau y su Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), (PRC-A), se hicieron notablemente más moderados después de 1933, los diplomáticos norteamericanos consideraban que no podían confiar plenamente en ellos para mantener el orden y proteger los intereses de la Unión. A pesar de la abrogación de la Enmienda Platt, en 1934, la soberanía cubana continuó limitada por la hegemonía norteamericana. Aunque este problema no era nada nuevo, luego de las dramáticas revueltas de 1933 los cubanos, en general, eran mucho más hostiles a la intervención yanqui en sus asuntos internos. La política estadounidense debió haberse adaptado al nacionalismo cubano, pero no lo hizo. Esta incapacidad de adaptación de Washington

significó la inevitabilidad de un nuevo enfrentamiento entre las fuerzas insurgentes del nacionalismo cubano y los Estados Unidos. Un joven, Fidel Castro, asumiría el desafío en 1952.<sup>10</sup>

Otro grupo de historiadores no ve la revolución de 1959 como resultado negativo o trágico de los fracasos de 1933. Más bien interpretan aquellos sucesos como una «prerrevolución» o un «prólogo», de signo positivo, de la actual Revolución cubana. La revolución de 1933 se convierte así en una suerte de ensayo de la de 1959, incluso cuando entonces no existían las condiciones «objetivas» y «subjetivas» para la victoria. Según esta perspectiva, en 1933 el equilibrio de las fuerzas sociales y de clase no era propicio «objetivamente» para el éxito de una revolución social (y socialista); «subjetivamente» los radicales de 1933 estaban demasiado divididos entre sí y eran inmaduros desde un punto de vista ideológico como para desarrollar una estrategia política clara de toma del poder. Como resultado, el deseo de liberación nacional del pueblo cubano no pudo concretarse en ese momento. Gran parte de estos escritos, sobre todo los realizados por estudiosos cubanos, pone en contraste la debilidad política de los radicales de 1933 con la dirección de Fidel Castro en el decenio de los 50. La incapacidad de la revolución del 33 demostró que la reforma del sistema neocolonial era imposible y que solo la revolución socialista podía traer a Cuba la libertad. El caos político y la corrupción existentes en Cuba entre 1933 y 1959 eran, por tanto, síntomas de la crisis no resuelta del dominio neocolonial. La línea de 1933 a 1959 es directa y los sucesos de 1933 se convierten en parte de la descripción histórica de 1959.<sup>11</sup>

Aunque esta breve visión de las publicaciones sobre el tema no hace justicia a las importantes observaciones de otros autores y a la sutileza de sus interpretaciones, todo lo escrito sobre la revolución de 1933 comparte la idea central de que su importancia se encuentra, en gran medida, relacionada con lo ocurrido (o con lo que dejó de ocurrir) en la década de los 50. En general, no veo nada erróneo en esa posición: si el propósito es comprender los orígenes de la revolución de 1959, debemos aceptar el legado de 1933. Mi objetivo, sin embargo, es distinto. Parto de un punto anterior —la coyuntura política y económica de 1920— y utilizo un

resultado distinto y más cercano: el consenso constitucional de 1940. Es importante reconocer que la selección de resultados históricos determina la forma en que construimos nuestra descripción; al hacerlo, la secuencia y la importancia relativa de los acontecimientos cambia de modo significativo. Obtenemos una apreciación más elevada de cómo las personas vieron cambiar su país, en formas más concretas e inmediatas. El hecho de que en el decenio de los 50 los cubanos consideraran traicionadas sus esperanzas y expectativas políticas nos dice poco de cómo surgieron y se fomentaron estos sentimientos. Si nos centramos demasiado en los fracasos y desilusiones del período de 1933 a 1940, corremos el riesgo de subestimar lo que cambió en Cuba entre 1920 y 1940. Concluyo la descripción en 1940 porque, en lo adelante, comienza una nueva fase en la historia política de Cuba. Entre 1940 y 1959, los adversarios políticos y la generación joven radicalizada pudieron usar como armas ideológicas, unos contra otros, los edictos y principios constitucionales, y se atacarían mutuamente de modo constante por traicionar las aspiraciones populares del pasado decenio; pero no lo hacían para derrocar el Estado moderno, sino más bien para mejorarlo y hacerlo más representativo de la voluntad popular.

Es importante señalar que, en años recientes, se han producido avances notables en la historiografía. Por ejemplo, la investigación sobre las complejidades de la movilización obrera y campesina, antes y después de 1933, ha arrojado más luz sobre la forma en que la actividad política popular engarzaba al capitalismo cubano y al imperialismo estadounidense en nuevas formas cualitativas y cuantitativas. Del mismo modo, los historiadores y especialistas en ciencias sociales que escriben sobre el proceso de la formación del Estado en América Latina han realizado observaciones importantes sobre las conexiones entre la insurrección popular y las bases sociales e históricas del poder político. Los estudiosos ven al Estado, cada vez más, como un conjunto de instituciones cosificadas, situadas «por encima de la sociedad» y las revoluciones como una serie de «sucesos» dramáticos que socavan el poder estatal. En lugar de ello, los Estados y las revoluciones deben estudiarse como procesos contruidos social e históricamente, a través de los cuales las personas luchan por asuntos de poder político, económico y cultural. Esta forma de ver al Estado —y cabría añadir a la política y la cultura en general—, procura evitar su reducción (y de la política y la cultura) a determinantes económicos, análisis simplistas de clase o modelos teleológicos de desarrollo social y económico.

## El Estado y la Revolución, 1920 a 1940

En resumen, entre 1920 y 1940, la práctica del poder estatal y las formas de resistencia popular a ese poder habían tomado direcciones nuevas. Para el tercer decenio del siglo xx, el Estado oligárquico se encontraba debilitado por la movilización popular «desde abajo» y por la insistencia de las clases medias en ser incluidas en la vida política del país. En muchos sentidos, sin embargo, antes de la década de los años 30 el Estado cubano no necesitaba ser fuerte: era la hegemonía estadounidense, ejercitada por medio de la Enmienda Platt, lo que garantizaba, en última instancia, el orden político y la estabilidad económica. La clase política cubana aceptó este arreglo y utilizaba el espacio político y económico a su disposición para obtener riqueza y poder. En otras palabras, antes de 1933 no había razones apremiantes para la existencia del Estado-nación cubano.

Algo que se desprende claramente de este estudio es que el mecanismo de gobierno oligárquico demostró ser muy eficaz en el mantenimiento del control sobre una población social y económicamente inestable. El gobierno oligárquico se basaba en la fragmentación del poder político en una sociedad mayoritariamente agraria. Aunque es cierto que los niveles superiores del Estado oligárquico se derrumbaron con notable rapidez a principios de 1933, el caciquismo y el caudillismo siguieron siendo muy fuertes, sobre todo en el campo. Se necesita más investigación sobre la forma en que funcionaron en Cuba. Los historiadores de España han señalado que el caciquismo era un fenómeno moderno que evolucionó durante la primera mitad del siglo xix. Típicamente, los caciques no eran parte de la oligarquía establecida; más bien constituían una nueva élite política, cuya influencia dependía de sus vínculos con el Estado central y el sector rural. Los caciques eran intermediarios entre las comunidades locales y las maquinarias políticas nacionales. En Cuba, el caciquismo evolucionó con especial fuerza después de la guerra de 1895 a 1898. Al igual que ocurrió con el de España, las redes personalistas de dependencia y patronazgo funcionaron como formas temporales de control social, dentro del contexto de la rápida destrucción de las relaciones sociales agrarias precapitalistas y el surgimiento de una fuerza laboral asalariada. Entre 1880 y 1930, los cubanos presenciaron la abolición gradual de la esclavitud, la destrucción de miles de comunidades y hogares campesinos, debido a la expansión de los latifundios, la evolución de la producción azucarera en colonias y la importación de cientos de miles de trabajadores emigrantes. Estos cambios en la vida y el trabajo en las regiones rurales de Cuba significaron que la mayoría de las personas no eran campesinas

ni proletarias, sino una combinación muy inestable de ambas. Sobre todo después de las muy cruentas guerras de independencia de la segunda mitad del siglo XIX, muchas personas pobres y desplazadas necesitaban algo de seguridad. Las empresas azucareras que invirtieron en Cuba después de 1898 aprovecharon la vulnerabilidad de la población: pagaban salarios bajos, imponían largas jornadas laborales y les negaban a los trabajadores el derecho de organizar sindicatos. Al propio tiempo, los capitalistas cubanos y extranjeros no tenían que preocuparse por la intromisión de las autoridades estatales de La Habana.

Fue en este contexto que se desarrollaron el Estado oligárquico, el caciquismo y el caudillismo. Los políticos necesitaban intermediarios que garantizaran votos durante las elecciones, y los terratenientes precisaban establecer el control sobre la fuerza laboral. A fin de solucionar estos problemas, los políticos y los gerentes de empresas buscaban personas que tuvieran influencia sobre las poblaciones rurales. Estas personas solían ser veteranos de las guerras de independencia que usaban su posición dentro de las comunidades rurales para brindar a sus seguidores tierras, empleos, crédito y acceso a círculos más amplios de «amigos», los cuales pudieran ayudar en momentos difíciles, que siempre se presentaban.

Antes de 1930, la rebelión política era sofocada por esta red de caudillismo y caciquismo. Este fue el caso de la rebelión de Veteranos y Patriotas, de 1923 a 1924. El Movimiento de Veteranos, sin dudas, reflejaba las crecientes contradicciones del Estado oligárquico, pero sería necesaria una crisis mucho más dramática para socavar su poder. Esta crisis se produjo en 1929, cuando el sistema mundial de comercio se desplomó. Para principios de la década de los años 30, las movilizaciones de masas, la revolución, la crisis económica y la amenaza de intervención de los Estados Unidos generaron amplias demandas para un país nuevo y democrático y un Estado-nación cubano.

Como hemos visto, hubo poco acuerdo en cuanto al tipo de Estado que debía sustituir al gobierno oligárquico. Es comprensible la falta de consenso dentro de los grupos antioligárquicos: las movilizaciones de masas y la crisis económica alimentaban la fertilidad ambigua de la política nacionalista radical. La energía insurgente de las clases populares y los sectores medios había cambiado la forma y el contenido de la práctica y el discurso políticos. Luego de 1933, los políticos cubanos tuvieron que tomar en cuenta con seriedad las preocupaciones supuestamente «no políticas» y «no nacionales» de los sectores populares. Para comprender el sentido de la insurgencia de las masas, los líderes políticos cubanos desarrollaron opuestas visiones de la forma en que el futuro Estado debía representar a los

Observaciones sobre el Estado y la Revolución en Cuba. 1920-1940.

cubanos. Estas concepciones podrían ser más o menos incluyentes o excluyentes, en dependencia de qué sectores «del pueblo» se consideraran más representativos de la nación.

Los grupos que, con cierta timidez, decían representar «al pueblo» se habían lanzado a la política de masas con poca o ninguna experiencia sobre la forma de canalizar las demandas populares, a fin de convertirlas en estrategias eficaces y en estructuras organizativas. La política había irrumpido en las regiones rurales de Cuba sin incitación de los estudiantes, los comunistas, los sindicalistas o los nacionalistas radicales. A fines de 1933, cuando las supuestas vanguardias de la lucha popular se encontraron con el poder estatal en las manos, no tenían los medios para dirigir o controlar al propio pueblo que decían representar. Esta debilidad también explica por qué, en enero de 1934, la coalición de Grau pudo ser echada a un lado con tanta facilidad por Fulgencio Batista y su ejército y policía reorganizados. También tomó por sorpresa a la oligarquía un militar de bajo rango, procedente de las capas populares, con ideas propias sobre la forma de gobernar a Cuba. Las clases políticas tradicionales se vieron obligadas a aceptar al impredecible Batista como «arquitecto» de una solución política posterior a la revolución.

Lo que podemos aprender de la experiencia cubana en estos años críticos es la forma en que un individuo poco convincente —Fulgencio Batista—, fijó las condiciones para la formación del Estado en Cuba, entre 1933 y 1940. El sargento convertido en coronel, joven y poco educado, logró reprimir, ganar, equilibrar y neutralizar a grupos tan dispares como los políticos tradicionales, los intereses azucareros, los sindicatos, los comunistas, los nacionalistas radicales y los Estados Unidos. Batista fue lo suficientemente astuto como para comprender que la política cubana nunca sería la misma después de 1933 y que la «paz social» y la «democracia» dependían de la incorporación al proceso político de las ahora «disciplinadas» clases populares. Sin embargo, también fue lo suficientemente tortuoso como para apropiarse del legado de la revolución del 33 para sus propios fines políticos. Esto explica por qué Batista realizó una alianza con el Partido Comunista y por qué permitió la formación de la Confederación de Trabajadores de Cuba. Mientras tanto, logró mantener desequilibrados a su principal competidor político, Ramón Grau San Martín y a los auténticos, así como a las empresas azucareras, mientras aplicaba su proyecto populista. También fue sorprendente cómo el joven coronel logró confundir a los todopoderosos Estados Unidos sin oponerse a sus líneas estratégicas en Cuba y en la región en general. Todo lo escrito sobre la Cuba del siglo XX tiende a centrarse en explicar por qué se

Los cubanos habían luchado durante años para que el Estado tomara en serio sus demandas y derechos y, aunque en retrospectiva sabemos que se les negaron sus expectativas, se habían sembrado las semillas de una transformación *posible*, e incluso más radical de la sociedad cubana.

produjo la revolución de 1959. Suele pasarse por encima de estos notables aspectos de su historia, con poca o ninguna interpretación de cómo o por qué la política cubana evolucionó del modo en que lo hizo.

Bajo el ojo avizor de Batista, el Estado redistribuyó la riqueza tomada de las utilidades capitalistas y la usó para pagar sus políticas sociales. Para el decenio de los 40, la «demagogia redistribucionista» del populismo cubano estaba acompañada por algunas reformas reales, aunque modestas. Ya en 1937, la Embajada británica había observado que

en los centrales, las huelgas de 1933 y 1934 habían dado impulso a un movimiento que hasta el momento se había desarrollado con gran lentitud en la agricultura. La mayoría de los centrales reconocen ahora a los sindicatos de trabajadores y aceptan tratar con ellos. Estos últimos han logrado aumentos salariales y mejoras de las condiciones, y muchas empresas han llegado a firmar contratos que instituyen la contratación rigurosa solo de trabajadores sindicalizados.<sup>12</sup>

Solo un decenio después, un informe estadounidense se quejaba de que «lo que comenzó como un movimiento razonable, por el reconocimiento de derechos laborales justos en los años que precedieron a la promulgación de la Constitución de Cuba de 1940, se ha convertido en una pirámide de excesos que amenaza con liquidar muchos de los bienes productivos del país».<sup>13</sup> Otro documento estadounidense, dirigido a hombres de negocios que deseaban invertir en Cuba, decía lo mismo:

Los años que siguieron a 1933 presenciaron la creciente influencia del movimiento laboral en la vida política de Cuba. Los gobiernos posteriores, que procuraron apoyar activamente a los trabajadores, promulgaron mucha legislación avanzada. No fue hasta la década de los 40, sin embargo, que toda la maquinaria oficial se colocó a favor de la fuerza laboral.<sup>14</sup>

Por supuesto, constituye una exageración decir que «toda la maquinaria oficial» estaba a favor de la fuerza laboral. Cuba era un refugio seguro del capital estadounidense, por muchas que fueran las quejas que los inversionistas tuvieran sobre la influencia de los trabajadores sindicalizados. Pero también era cierto que los capitalistas extranjeros no actuaban ya con la impunidad total que lo habían hecho antes de 1933. La Constitución de 1940 representó un arreglo político

que reflejó un nuevo equilibrio de poder en el país y los capitalistas extranjeros tendrían que adaptarse a esta nueva realidad. La importancia del consenso de 1940 —como la historia posterior nos permite conocer—, no se encuentra en lo que en realidad se logró, sino más bien en lo que se prometió y sobre todo en por qué fue necesario hacer esas promesas.

La tendencia de los historiadores de ver a Batista exclusivamente como contrarrevolucionario —sobre todo a la luz de la revolución de 1959— ha oscurecido las bases en que se sustentó su fase populista de 1937 a 1940 y, diría yo, el porqué Cuba se convirtió en una democracia oficial en 1940. Batista se vio como líder de la revolución de 1933 y aunque es claro que ponemos en duda sus credenciales revolucionarias, no debemos subestimar el hecho de que Batista era el resultado de una conmoción revolucionaria, y que él se veía como tal. Le encantaba leer biografías políticas y uno de sus héroes era Napoleón Bonaparte; no sabemos si se veía como el Napoleón cubano, pero sí que consideraba que era responsabilidad suya, su «destino», poner «orden» al «caos» revolucionario. Batista era hábil a la hora de reclutar aliados y atender sus preocupaciones, mientras preparaba las condiciones para ascender a la presidencia en 1940. Por primera vez en la historia de Cuba, se incorporaban segmentos importantes de las clases populares —lo desearan o no—, al «dominio público» organizado por el Estado. El breve gobierno de Grau había intentado atender las aspiraciones públicas y llevar la democracia a Cuba, pero sería Batista, y no Grau, quien, después de 1933, se convertiría en el «arquitecto» del Estado.

En un reciente artículo sobre el populismo en América Latina, Alan Knight calificó a Batista, en la década de los años 30, de «populista resbaloso».<sup>15</sup> Esta descripción es adecuada, y la mayoría de los escritos sobre Batista en esta etapa la comparten. El «carácter resbaloso» del coronel —diría yo— no se debía tan solo a su conocida tendencia a desconfiar prácticamente de todos los que lo rodeaban y de enarbolar cualquier idea que sirviera a sus fines inmediatos, sino también a los «resbalosos» tiempos en que vivió. Batista comprendió que, después de 1933, la práctica y el discurso políticos necesitaban reflejar preocupaciones y necesidades «populares». Comprendía también que,

debido a que la vida económica y social de Cuba estaba tan dominada por los Estados Unidos bajo Franklin D. Roosevelt tendría que hacer parecer que Cuba evolucionaba hacia la democracia. El problema central era cómo, y bajo la autoridad de quién, se establecería la «democracia». Batista y Cuba no tenían el mismo poder de negociación económica y política que Lázaro Cárdenas y su México; el dirigente cubano tendría que andar con mayor cuidado en sus tratos con los estadounidenses. Lo que a fines del decenio de los 30 muchos latinoamericanos percibían, cada vez con mayor claridad, era que a pesar de la retórica de Buena Vecindad, los Estados Unidos no permitirían que el significado de la democracia se utilizara contra sus intereses estratégicos. No podía confiarse en que los indóciles pueblos del sur establecieran una democracia propia, y tenían que ser mantenidos bajo el ojo avizor (y los fusiles) de dictadores fiables, al menos hasta que el pueblo estuviese dispuesto a asumir un comportamiento político «responsable». Batista comprendió y aceptó esta lógica, del mismo modo que era muy consciente de que, luego de la revolución de 1933, los cubanos no podían ser gobernados del mismo modo. Por lo tanto, entre 1934 y 1940, él fue, a un tiempo, dictador, aliado de los Estados Unidos, populista y nacionalista; y mantuvo a cubanos y norteamericanos preguntándose cuál sería su siguiente movimiento. Al hacerlo tan bien, Batista robó la iniciativa política a los demócratas, comunistas, nacionalistas radicales y políticos tradicionales. Dada la confusión política y económica de esos tiempos, es difícil imaginar cómo cualquier líder hubiera podido lograr una proeza tal sin ser bien resbaloso.

La política cubana, pues, había cambiado mucho y permanecido igual. La corrupción y la violencia seguirían dominando la escena política; pero después de 1933, los sectores populares estaban menos atemorizados, tenían nuevos recuerdos y tradiciones de lucha y poseían nuevas formas de práctica política. Los cubanos habían experimentado muchas penurias y derrotas, y algunas victorias. La clase obrera y los cubanos pobres seguían siendo espectadores, mientras las élites políticas luchaban por el acceso al Estado, pero la idea de que este debía ser «popular» y representar a todo el país estaba ahora implantada en la cultura política cubana. El día antes de que el gobierno Mendieta-Batista recibiera el reconocimiento de los Estados Unidos, Grau abordó un barco con destino a México. Su partida, sin embargo, fue diferente que la de cualquier otro presidente en la historia del país. El 29 de enero, Grant Watson, de la Embajada británica, describió así la escena del muelle:

Una multitud de sus simpatizantes se reunieron en el muelle y mientras la embarcación navegaba por el puerto,

corrieron a su lado. Pertenecían a las clases más pobres y eran muy entusiastas. Consideraban al doctor como su campeón. Había estado en su cargo solo cuatro meses y medio, y sin embargo había hecho reformas, algunas de las cuales perdurarían. Los estudiosos de la historia recordarán su período debido al gran cambio que sobrevino en Cuba. El imperio de los magnates del azúcar resultó conmovido, en cualquier caso, por el presidente —y quizás para siempre.<sup>16</sup>

La visión de Watson era notable, dado que pocas personas apreciaron el significado histórico de aquellos caóticos meses de 1933. Todas las reformas importantes del régimen de Grau fueron, de hecho, implementadas por los gobiernos futuros, incluyendo el régimen represivo de Mendieta-Batista, de 1934-35. Indudablemente, estas reformas no fueron implementadas de la forma en que las intentó Grau, y la estabilidad en Cuba no se logró por largo tiempo.

El país había llegado a un estado de agotamiento político y pasarían otros seis años antes de que existiera en Cuba algo que recordara la paz social. En verdad, un gran cambio había llegado a Cuba. Los cubanos habían luchado durante años para que el Estado tomara en serio sus demandas y derechos y, aunque en retrospectiva sabemos que se les negaron sus expectativas, se habían sembrado las semillas de una transformación posible, e incluso más radical de la sociedad cubana. En qué grado ese objetivo se materializaría dentro de la cultura política cubana, y quién lo aprovecharía, es tema de otra fase de la historia de Cuba.

El arreglo político de 1940 se erigía, por tanto, sobre cimientos endebles. Se produjo por una combinación concreta de sucesos internos (la crisis del gobierno oligárquico y la revolución de 1933) y sucesos externos (la depresión y la Segunda Guerra Mundial). Las condiciones favorables de tiempos de guerra brindaron a los productores cubanos un mercado azucarero estable entre 1939 y 1945. Las realidades políticas y económicas de la depresión, así como la creciente amenaza de la guerra mundial, obligaron a los Estados Unidos a brindar mayor acceso de mercado al azúcar cubano. A pesar de las incertidumbres de la política regional e internacional, el ambiente inversionista en Cuba alcanzó 1 500 millones de dólares; en 1933 había disminuido a apenas 300 millones, pero en 1937 las inversiones estadounidenses habían alcanzado casi dos veces el monto original.<sup>17</sup> La producción azucarera interna de los Estados Unidos era insuficiente para la demanda de tiempos de guerra, y Filipinas, el principal competidor de Cuba, estaba demasiado lejos. Mientras duró la amenaza de guerra, Cuba tuvo garantizado un mercado estable para su azúcar. Disminuyeron los aranceles y los precios mejoraron. En palabras de Jules Benjamin, «la industria azucarera de la Isla debió cambiar

de subproducción obligada a una producción máxima para la guerra».<sup>18</sup> La oligarquía cubana hacía mucho clamaba por un tratado azucarero permanente con los Estados Unidos, pero lo más que pudo obtener fue un acuerdo excepcional en condiciones de guerra.

Como consecuencia de este comercio, los ingresos permitieron a la élite cubana tolerar —y pagar a regañadientes— las intrusas políticas estatistas de Batista. Las condiciones de guerra brindaron a este el espacio político para promover su propio tipo de populismo. La forma que tomó se debió a que el liberalismo del New Deal de Roosevelt y la política del Buen Vecino no contemplaban con buenos ojos las dictaduras militares manifiestas, sobre todo en Cuba. La principal publicación de la industria azucarera cubana, *La Revista Semanal Azucarera*, resumió la situación diciendo que «en un mundo en dificultades en que prima la lucha social, sería difícil recalcar en demasía la importancia que para los Estados Unidos representa tener de vecino un país democrático y razonablemente próspero, donde se desconocen todos los “ismos” surgidos de la pobreza extrema».<sup>19</sup> Estas palabras se escribieron en marzo de 1939, y gracias a que contó con un mercado azucarero estable en los Estados Unidos, Cuba fue sin dudas un «país razonablemente próspero» durante los cinco años siguientes.

Los crecientes ingresos, gracias a las ventas de azúcar en el decenio de 1940, significaron que los diversos gobiernos cubanos tuvieron medios financieros para encerrar a muchos sindicalistas y activistas de izquierda dentro de la irresistible red del clientelismo estatal. Las organizaciones de masas debieron aprovechar el espacio político que se había abierto entre 1937 y 1945 para obtener mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, derecho a organizarse y a lograr empleos e ingresos estatales. La capacidad de los dirigentes sindicales e izquierdistas de atender a estas demandas de la base dependía de su acceso al Estado, y entre 1934 y 1944, ello significaba el acceso a Batista. La credibilidad política dependía de la capacidad del dirigente de negociar de modo positivo las condiciones del compromiso entre el Estado y los que lo apoyaban. Después de 1938, el Partido Comunista y muchos dirigentes sindicales entraron en estas negociaciones. Los sindicatos obtuvieron reconocimiento legal, los convenios colectivos se hicieron más amplios, los salarios mejoraron y hubo más seguridad en el empleo para algunos trabajadores. Los líderes sindicales e izquierdistas pudieron haber rechazado la tentación del patrocinio estatal, pero hacerlo significaría no obtener nada para sus seguidores de base. La memoria política de la revolución de 1933 era demasiado poderosa para que se pudiera hacer caso omiso de ella, y los trabajadores necesitaban algo a cambio, después de

tantos sacrificios y penurias. La única opción era el aislamiento y la ineficacia políticos. Irónicamente, la izquierda cubana —lo que de ella quedaba— ganó acceso al Estado solo después de su derrota y marginación. El apoyo del Partido Comunista a Batista pudiera haber hecho parecer la derrota como una victoria; pero era Batista quien mantenía la iniciativa política, no los comunistas ni sus cuadros sindicales.

Con el final de la guerra mundial y el regreso a condiciones inseguras de mercado, el consenso político batistiano se deshizo enseguida. Sin una fuente estable y lucrativa de ingresos estatales provenientes del mercado estadounidense de tiempos de guerra, las bases económicas del populismo cubano cayeron y la fragilidad de la pax batistiana se hizo evidente. Después de 1944, el discurso político cubano mantuvo su forma populista, pero el Estado ya no poseía los recursos, ni la credibilidad política, para manejar con eficacia la estrategia populista de acumulación de capital. En lo adelante, el espacio político y económico que existió entre 1937 y 1944 se redujo a un ritmo alarmante, sobre todo para quienes eran socios menores del consenso populista, como los comunistas y los sindicalistas. La política de Guerra fría no admitía alianzas estatales con comunistas. Luego de 1944, los antiguos aliados en el proceso de formación del Estado lucharon literalmente por sus decrecientes recursos. Cortado el cordón umbilical del Estado, a algunos sectores políticos se les dificultaba sobrevivir sin su patrocinio. Cuando, en 1944, fueron electos Ramón Grau San Martín y los auténticos, las justificaciones populistas para la inclusión de los sectores populares en las redes de patrocinio estatal ya no enmascaraban la realidad de flagrante corrupción y política electoralista. Para el decenio de los 50, esta situación llegó a provocar otra crisis dentro de la sociedad cubana. La escena estaba lista para un conjunto distinto de contradicciones políticas y económicas, que culminaría en una situación revolucionaria nueva.

Después de 1948, un tipo distinto de crisis hizo presa de Cuba. Durante los últimos años de la década de los 40 y en los 50, el debate estuvo guiado por un sentimiento generalizado de que los políticos corruptos habían «traicionado» y manipulado cínicamente los sentimientos y expectativas populares de 1933-1940. Se les consideraba no solo parásitos que vivían de las instituciones estatales —lo que no era nuevo para los cubanos—, sino que, después de 1940, se les veía también como violadores del patrimonio colectivo, que pertenecía a toda la nación. El consenso de 1940 demostró ser demasiado frágil y las estructuras estatales demasiado débiles para apropiarse por completo de la memoria colectiva de los diversos grupos sociales que habían luchado dura y largamente para cambiar

sus condiciones de existencia. Sin embargo, lo que hizo de los debates posteriores a la Constitución de 1940 algo más que pura verborrea retórica, fue que los principios constitucionales podían interpretarse, y fueron interpretados, en formas potencialmente radicales. Los auténticos de Grau sintieron los efectos de esa presión popular en 1948, Eduardo Chibás y sus seguidores se separaron para formar el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) en un intento de recobrar los «verdaderos» ideales de 1933 y 1940. En gran medida, este fue el contenido de las luchas de fines de la década de los 40 y de los 50. El «edificio simétrico» que Batista tanto contribuyó a construir demostró ser demasiado frágil, y llegaría el momento en que se desplomaría a su alrededor.

## Notas

1. Los términos clases populares y clases económicas eran utilizados comúnmente por periodistas, políticos y comentaristas sociales para describir los dos grupos sociales de Cuba en los primeros cuarenta años del siglo. Las clases populares comprendían a todos los sectores que no fueran la élite política y las clases azucarera, comercial e industrial. Estaban compuestas por los asalariados urbanos y rurales, los campesinos, los grupos de clase media inferior de estudiantes, empleados públicos y trabajadores de pequeños comercios. Las clases económicas estaban compuestas por los políticos profesionales que dominaban los partidos políticos tradicionales (liberales, conservadores y miembros del Partido Popular), así como por dueños de ingenios, colonos e intereses bancarios y comerciales cubanos y españoles residentes. Para los fines de este trabajo, usaré el término clases populares en el sentido expuesto. Como veremos en las páginas siguientes, si la identidad de clase se define según la relación que se guarde con los medios de producción, entre 1900 y 1940 en Cuba esta identidad era muy inestable. El desempleo o subempleo de masas, combinado con la importación en gran escala de trabajo inmigrante, contribuyeron a socavar cualquier identidad de clase estable o de largo plazo. Para un análisis académico de los sectores populares, o «el pueblo» o «lo popular», véase Guillermo O'Donnell, «Tensions in the Bureaucratic-Authoritarian State and the Question of Democracy», en David Collier, ed., *The New Authoritarianism in Latin America*, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 288-291.
2. Véase Louis A. Pérez, «Cuba under the Platt Amendment», *The War of 1898*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1998, pp. 32-35.
3. El texto completo en inglés de la Constitución de 1940 puede encontrarse en Russell H. Fitzgibbon, *The Constitutions of the Americas*, University of Chicago Press, Chicago, 1948, pp. 226-96.
4. Rene Rayneri, «Colonel Batista and Cuba's Future», *Current History*, n. 50, abril de 1939, p. 51.
5. Fulgencio Batista, citado en *The Havana Post*, 23 de junio de 1937, p. 10.

Observaciones sobre el Estado y la Revolución en Cuba. 1920-1940.

6. Laurence Whitehead, «State Organization in Latin America Since 1930», en Leslie Bethell, ed., *The Cambridge History of Latin America*, v. VI, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, p. 9.
7. E. P. Thompson, *The Making of the English Working Class*, Vintage Books, Nueva York, 1963, pp. 8-12.
8. Para ejemplos, véanse Denis B. Wood, «The Long Revolution: Class Relations and Political Conflict In Cuba, 1868-1968», *Science and Society*, a. 34, n. 1, Nueva York, primavera de 1970; Luis Aguilar, *Cuba 1933: Prologue to Revolution*, Cornell University Press, Ithaca, Nueva York, 1972; Robin Blackburn, «Prologue to the Cuban Revolution», *New Left Review*, n. 12, Londres, octubre de 1963; Ramón Eduardo Ruiz, *Cuba: the Making of a Revolution*, University of Massachusetts Press, Amherst, 1968.
9. Véase Luis Aguilar, ob. cit.; Ramón Bonachea y Marta San Martín, *The Cuban Insurrection, 1952-1959*, Transaction Books, New Brunswick, 1974; Andrés Suárez, *Cuba, Castro and Communism, 1959-1966*, MIT Press, Cambridge, 1967; Jaime Suchlicki, *Cuba, from Columbus to Castro*, Charles Scribner's Sons, Nueva York, 1974.
10. Véase Jules Benjamin, *The United States and Cuba: Hegemony and Dependent Development, 1880-1934*, Pittsburgh University Press, Pittsburgh, 1977; y *The United States and the Origins of the Cuban Revolution: An Empire of Liberty in the Age of National Liberation*, Princeton University Press, Princeton, 1990.
11. Véanse David Raby, *The Cuban Pre-Revolution of 1933: An Analysis*, Institute of Latin American Studies, Glasgow, 1975; Lionel Soto, *La revolución del 33*, 3 t., Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977; José Tabares del Real, *La revolución del 30: sus dos últimos años*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973. El ejemplo más reciente de esta perspectiva se encuentra en Jorge Ibarra, *Prologue to Revolution, Cuba, 1898-1958*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 1998, sobre todo en el capítulo 11.
12. «Mr. Rees to Mr. Eden», La Habana, 20 de febrero de 1937, Enclosure Document 21, «The Labour Situation In Cuba and the British West Indies», PRO/FO/A/1864/65/14.
13. Banco Nacional de Reconstrucción y Fomento, *Report on Cuba*, Washington DC, 1951, p. 138.
14. Departamento de Comercio de los Estados Unidos, *Investment in Cuba*, United States Government Printing Office, 1951, p. 21.
15. Alan Knight, «Populism and neo-populism in Latin America, especially Mexico», *Journal of Latin American Studies*, n. 30, Londres, mayo de 1998, p. 231.
16. «Mr. Grant Watson to Sir John Simon», La Habana, 29 de enero de 1934, PRO/FO/A/1127/29/14, n. 13, (confidencial).
17. *Revista Semanal Azucarera*, Editorial de la Bolsa, 1945, p. 59.
18. Jules Benjamin, *The United States and the Origins of the Cuban Revolution*, ob. cit., p. 100.
19. *Revista Semanal Azucarera*, ob. cit.

© ~~THE HAVANA~~, 2001.